

LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA COMO ARENA DE ACCIÓN POLÍTICA: DOS CONFLICTOS EN LA PROVINCIA DE MISIONES¹

Brián Germán Ferrero
Dr. en Antropología Social
Posdoctorado en el Center for Integrative
Conservation Research-University of Georgia
Investigador del CONICET, Universidad Nacional de Misiones
brianferrero@conicet.gov.ar

RESUMEN

En este trabajo partimos de considerar que el conservacionismo es una arena de acción política. Nos referimos al conservacionismo como un conjunto de prácticas, ideas e instituciones que trabajan en el gobierno de territorios considerados naturales, de especies animales y vegetales. La conservación no sólo se construye en instituciones oficiales y no gubernamentales, que aplican políticas y producen discursos sobre la naturaleza y los territorios, sino que se configura en múltiples niveles, siendo en las prácticas concretas en terreno donde se materializa. El análisis aquí presentado se origina en dos conflictos que tuvieron lugar a finales de la década de 2000 en la provincia de Misiones (Argentina) donde comunidades indígenas, por un lado, y rurales, por otro, articularon sus demandas y acción política participando en “una arena conservacionista”. Para esto analizo cómo ingresaron a tal arena, la institucionalidad en que se formaliza el diálogo entre pobladores y conservacionistas, y cómo esto lleva a la generación de nuevas formas de identidad y de subjetividad.

Palabras clave: políticas de conservación, poblaciones locales, participación, Áreas Naturales Protegidas.

¹ Febrero de 2013. Fecha de aceptación: octubre 2013.

ABSTRACT

In this paper I consider that conservation is an arena of political action. I consider conservation as a set of practices, ideas and institutions working on the conservation of considered natural territories, wildlife and plants. Conservation is not only generated in official and non-governmental institutions, that implements policies and create discourses about nature and territories, but it is built on multiple levels, and materializes in concrete field practices. These practices are generated in social relations between state agencies, NGOs, international development agencies and local communities. Here I analyze at two events that took place in the late 2000s in the province of Misiones (Argentina). Indigenous communities, on the one hand, and a rural community, on the other, articulated their demands and political action through participation in “a conservationist arena”. I analyze how these communities entered this arena, and the institutional conditions and ideas about territory, in which this process took place.

Key words: conservation policies, local communities, participation, Natural Protected Areas.

INTRODUCCIÓN

El conservacionismo es una arena de acción política. La conservación de la naturaleza se constituye en múltiples instancias (reuniones, congresos, documentos, discursos) donde participan científicos, políticos, funcionarios, miembros de ONGs, pero es en las prácticas concretas en terreno donde se materializa. Estas prácticas se generan en las relaciones sociales entre agencias estatales, ONGs, agencias internacionales de desarrollo y comunidades locales, mientras, en el terreno, las poblaciones rurales e indígenas se enfrentan, resisten, negocian y acuerdan las actividades de conservación.

En este trabajo, analizo cómo los pobladores rurales de la provincia de Misiones en el noreste argentino articulan sus demandas y acción política a través de participar en lo que llamo “una arena conservacionista”, entendiendo a esta como un espacio de disputa donde las relaciones giran en torno a un espacio político, en el que el manejo del ambiente, el territorio, los recursos y las identidades son generados y negociados por múltiples actores. Para las poblaciones locales, la participación en esta arena implica una tensión entre someterse a las imposiciones de organizarse institucionalmente y las posibilidades de reclamar por derechos frente al Estado y de luchar por un lugar en el territorio (Agrawal 2005). En esta arena se generan tensiones entre la creación de identidades como grupos sociales y ser creados como grupos sociales (Scott 1998, Brockington 2004, MacDonald 2003, Agrawal *et al.* 1999, Li 1996, Brosius 2006). Tal proceso viene acompañado por una transformación en la subjetividad, en el marco de la cual los pobladores comienzan a construir un nuevo

lugar en el mundo, reformulando su identidad en términos ambientalistas y ligándose a este espacio al conformar una nueva identidad social como “conservacionistas”.

La conformación de esta arena se liga a procesos de ambientalización (LeiteLopes 2004) de los conflictos socioambientales, en tanto este tipo de conflictos promueve una interiorización de los derechos y de los argumentos ambientales, presionando por leyes y controles estatales, al tiempo que aquellos son alimentados por tales instrumentos estatales. Por otro lado, la ambientalización es un proceso de interiorización de comportamientos y prácticas, durante el cual, si bien LeiteLopes pone énfasis en la educación ambiental, también muestra que estos procesos proveen códigos de comportamiento correctos sobre usos cotidianos buscando normalizar las conductas.²

Este artículo se origina en el análisis de dos conflictos que involucraron a poblaciones colonas y mbya-guaraníes del área de la Reserva de Biosfera Yabotí. En el caso del conflicto llevado adelante por familias de colonos, en un primer momento el reclamo fue por tierras, pero luego se restringió a servicios y, finalmente, a derechos como ciudadanos, mientras que el conflicto que involucró a los indígenas fue la preservación del territorio y la detención de la deforestación del monte nativo. Contrastando estos hechos con situaciones similares entre pobladores rurales e indígenas que habitan junto a Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la provincia, se analiza cómo se presenta el discurso de la conservación en la acción política de estas comunidades, colonos e indígenas, sin buscar un análisis comparativo entre las formas de acción política de colonos y mbya-guaraníes sino los elementos en común presentes en conflictos por la tierra, el acceso al monte y la relación con el Estado. Por otro lado, se presenta la pregunta por cómo estas formas de acción política llevan a colonos e indígenas a generar nuevas identidades sociales en la lucha por legitimar posiciones dentro de la arena local de la conservación.³

En la provincia de Misiones diversos actores (agencias gubernamentales, ONGs ambientalistas nacionales e internacionales, y agencias de ayuda bilateral) están involucrados en procesos de construcción de un marco institucional, relativamente coherente, en torno a la emergente arena conservacionista. Si bien las agencias de conservación y de desarrollo que coinciden en el área tienen por horizonte de diálogo común la conservación de la naturaleza, existen significativas diferencias ideológicas y de acción, entre las que pueden distinguirse dos tendencias. Una tendencia conservacionista biológica prioriza el cuidado del bosque nativo, su flora y fauna, y donde las acciones que se lleven a cabo con las poblaciones locales tienen que tener por fin primero la conservación de la masa boscosa: aquí podemos incluir a Fundación Vida Silvestre Ar-

² Según LeiteLopes (2004), la educación ambiental proporciona códigos de comportamientos correctos sobre usos cotidianos. Además de información sobre el mundo natural y sobre las amenazas a la naturaleza, la salud humana y la calidad de vida, la educación ambiental enfatiza en una normalización de las conductas en la vida cotidiana: “La educación ambiental parece comportar esos aspectos de manual de auto-ayuda pública a través de la conducta individual” (27).

³ Este artículo se basa en trabajo de campo llevado a cabo durante sucesivas estadías en colonias en torno a la RBY y en comunidades mbya-guaraníes de esta Reserva, entre octubre de 2006 y diciembre de 2008. Previamente realicé campañas de un total de 14 meses de trabajo de campo entre febrero de 2002 y abril de 2004. En los años 2010 a 2012, realicé, junto a Elías Gomes, entrevistas a colonos, a funcionarios oficiales de conservación y a miembros de ONGs.

gentina (FVSA, socio local de WWF), el sector dominante de funcionarios del Ministerio de Ecología y RNR de la provincia de Misiones. La otra tendencia pone énfasis en las acciones de desarrollo local, considerando que el cuidado del ambiente tiene que favorecer a la calidad de vida de los pobladores. Aquí encontramos a la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM, presente en el área hasta 2005), el AMIRBY (Área de Manejo Integral de la Reserva de Biosfera Yabotí), que si bien depende del Ministerio de Ecología y de RNR, ha presentado fuertes roces con la mayor parte de sus funcionarios, y también a ciertas líneas dentro de la Administración de Parques Nacionales, que se han hecho presentes, no de manera sistemática, en la región. Finalmente, otra institución que se ubica en esta tendencia segunda es el Equipo Nacional de la Pastoral Aborígen, que participa activamente en conflictos socioambientales que involucran a las comunidades mbya-guaraní de la región y que ha trabajado estrechamente con AMIRBY y FUNAM.⁴

Más allá de las diferencias entre las agencias, se establecen redes de actores que participan en espacios comunes de discusión donde se generan horizontes compartidos de significado. A pesar de interactuar con los mismos actores conservacionistas y de transitar por los mismos espacios institucionales, las distinciones entre los colonos y Mbya no pueden minimizarse, ya que existen diferencias en las formas de lucha y en las demandas de cada sector. A su vez, cada una de estas poblaciones ha desarrollado sus propias formas de organización para establecer diálogos con los organismos estatales.

La articulación de la acción política de colonos y guaraníes, en términos ambientales, tiene lugar en un contexto donde se está acelerando la explotación de los recursos forestales en Misiones. A su vez, se asiste a un cambio de políticas de conservación que, hasta entonces, excluían a las poblaciones locales hacia un modelo que combina conservación con desarrollo y propone la integración de las poblaciones locales, modelo que se implementa con cierto atraso si es comparado con las políticas de conservación en otras partes del mundo (Adams 2004, Redford 2003, Brosiuset.al. 2010). De manera que la emergencia de una arena conservacionista en Misiones tiene lugar en un contexto de marginalización de las poblaciones en una de las provincias más pobres del país y en un área donde las agencias conservacionistas constituyen una importante fuente de recursos económicos. Más allá de los distintos reclamos, los problemas ambientales desempeñan un papel central en la argumentación política, ya que tanto colonos como mbya guaraníes argumentan que sólo su presencia en esta región puede asegurar la supervivencia a largo plazo de los bosques. La respuesta del Estado consiste en tratar de formalizar el espacio político de interacción entre agencias gubernamentales y comunidades, incorporando también a agencias internacionales de desarrollo y de conservación a los ámbitos de diálogo. Los proyectos de conservación con base comunitaria establecen un vínculo ambiental que une derechos a formas particulares de identidad, de organización social, de formas de vida y de manejo de los recursos (Li 2005). Estos proyectos pueden ser un vehículo para intensificar el control del Estado, pero también pueden fomentar una relación más cercana con el Estado, funcio-

⁴ Para un mayor análisis de estas diversas tendencias ver Ferrero y De Micco (2012) y Nardi (2011).

nando como espacios para renegociar responsabilidades y derechos en lugar de reforzar la oposición entre poblaciones rurales y Estado (Li 2005).

El presente artículo se inicia con una exploración de los conceptos teóricos en torno al desarrollo, la conservación y la subjetividad sociocultural. En segundo lugar, presento una caracterización de la expansión del conservacionismo en Misiones para luego desarrollar la formación de una arena de conservación donde se resignifican el territorio y la posición de las poblaciones locales. En particular, aquí expongo los dos conflictos a partir de los cuales han surgido las discusiones aquí presentadas. A continuación, analizo las nuevas configuraciones identitarias que se generan y la forma particular en que se produjo una institucionalización de los conflictos socioambientales.

TERRITORIOS, COMUNIDADES Y CONSERVACIÓN

Las prácticas de conservación de la naturaleza constituyen formas de manejo y de control de las poblaciones y espacios (Brockington *et.al.* 2007, Fletcher 2010). Si bien estas prácticas pueden ser entendidas como parte de la lógica administrativa del Estado (Scott 1998), este no es el único agente en esta tendencia que pretende administrar y hacer legible poblaciones y territorios (Chapin 2004).

En la década de 2000, en Misiones, adquieren creciente peso nuevas modalidades de manejo de las ANP que pretenden dar voz y cierta cuota de poder a las poblaciones locales. Tales modalidades de conservación, que se ligan a proyectos de desarrollo, han sido consideradas como formas de coerción en las que el disenso es permitido en pequeñas dosis, de manera que las alteraciones sustantivas a los proyectos son constreñidas. Se ha señalado que la conservación basada en la participación puede ocultar formas novedosas de sometimiento de las poblaciones locales (Ferguson 2006, Fletcher 2010, MacDonald 2010, West *et. al.* 2006). A su vez, estos modelos participativos han sido vinculados con el avance del neoliberalismo, donde la descentralización del Estado genera nuevas formas de organización de las poblaciones (Brockington *et.al.* 2007). Desde tal perspectiva la “participación” representa un régimen de civilidad que tiene por objetivo contener y domesticar el disenso. De manera que el manejo de recursos de base comunitaria no es sustituto de la construcción de agrupaciones que buscan reformas políticas (Brosius *et. al.* 2003). Incluso Brosius (2006) sugiere que los gobiernos suelen ser entusiastas sobre los proyectos de desarrollo y de conservación de base comunitaria o de otras formas de descentralización, ya que estos proyectos, de hecho, desvían la amenaza de que la gente se organice políticamente. De manera que lo que se cuestiona es si estas formas de conservación y de desarrollo implican la transferencia, por parte de los Estados, de autoridad real sobre los recursos naturales a las comunidades locales o si, por el contrario, usan esos proyectos como una oportunidad para aumentar su control (Turner 2006).

James Ferguson (2006) señala que esta clase de modelos de conservación se basa en la articulación de redes transnacionales conformadas por corporaciones económicas y financieras, por grandes organizaciones de conservación, en las que necesariamente participan los Estados. El creciente poder y la

omnipresencia de tales redes crea situaciones donde el capital y los beneficios del desarrollo no se propagan de la forma en que es propuesto públicamente. Según Ferguson (2006), el capital y el desarrollo conjugados con la conservación llevan a una re-territorialización de determinadas áreas, de las que se extraen nuevos *commodities*, transformándose en enclaves de vigilancia o de conservación. De esa manera, pasan a ser áreas transnacionalizadas, gobernadas de acuerdo con las necesidades y las agendas de las redes transnacionales de actores e instituciones, en lugar de responder a las necesidades locales de desarrollo. Así, las ANP constituirían un ejemplo sobresaliente de espacios transnacionales de alto valor de biodiversidad, que son re-regulados para otorgarles nuevos valores económicos y ponerlos a disposición de elites nacionales e internacionales, muchas veces a expensas de las comunidades rurales. De manera que, si bien las ANP suelen favorecer, sobre todo, al sector privado (por ejemplo, agencias de turismo, propietarios hoteleros, ecodesarrolladores, etc.), son presentadas como beneficiosas para las comunidades locales, las que, en teoría, se privilegiarían al recibir programas que combinan desarrollo económico y conservación como parte de las políticas de “desarrollo sustentable” (Ferguson 2006).

En este panorama, las instituciones transnacionales de conservación toman un rol central en el establecimiento de parámetros de uso del espacio, de los recursos y del gobierno de las poblaciones (MacDonald 2010). La noción de un ambiente global se manifiesta conjuntamente con objetivos políticos globales, mientras que las ecologías locales son sometidas a domino de las instituciones transnacionales, de manera semejante a lo que sucedía con las instituciones coloniales (MacDonald 2010). Estas son fuerzas que pueden constreñir lo local, puesto que los organismos transnacionales de conservación se manejan en base a complejas alianzas con los Estados y con corporaciones donantes, en el marco de las cuales los intereses de las comunidades locales no se encuentran precisamente entre las prioridades (Chapin 2004).

Frente a este tipo de consideraciones, LeiteLopes (2004) considera que la persuasión a involucrar a los ciudadanos con las cuestiones públicas ambientales parece llevar a una neutralización de los miedos en cuanto a las propiedades subversivas de la participación y, al mismo tiempo, parece legitimar la participación popular. Tal proceso tiene lugar a partir de la experiencia de los movimientos sociales brasileños, surgidos en el proceso de re-democratización, y de la lucha contra el régimen autoritario, lo que propició la búsqueda de políticas públicas, favoreciendo una mayor participación popular. Desde tal perspectiva, la ambientalización se liga a la democratización de las políticas públicas. Pero, no siempre las formas e instrumentos participativos ofrecidos por estas políticas encuentran eco en las prácticas de las poblaciones o en la pequeña política local, así como tampoco las políticas democráticas siempre pueden lidiar con las demandas de la población.

Estos modelos de conservación ligados al desarrollo también ofrecen elementos que activistas y comunidades tratan de utilizar estratégicamente en sus luchas (Escobar 1999). Diversos autores (Chapin 2004, Winer 2003) señalan que, en América Latina, las ANP no sólo han sido formas de imposición y de sometimiento, sino que también las comunidades indígenas las han usado como oportunidades para proteger sus territorios. Esto presenta una paradoja desde

la que defender la naturaleza y las culturas locales implica crear un lenguaje que refleje la experiencia local, sobre la naturaleza, y la cultura, sobre la base de proyectos externos (Escobar 1999). En términos de Escobar, estos modelos de conservación

(...) implican nuevas formas de colonización del paisaje biofísico y humano, pero también pueden contribuir a la creación de nuevas posibilidades políticas para las comunidades locales. La respuesta depende, en gran medida, del grado en que las comunidades locales se apropien y utilicen los nuevos significados para lograr sus propios objetivos, relacionándolos con otras identidades, circuitos de conocimiento y proyectos políticos (218).

El gobierno de un territorio y su población, e incluso la implementación de un proyecto particular, no constituyen un paquete cerrado y finalizado, sino propuestas desde donde surgen discusiones y reinenciones. Así, un proyecto de desarrollo difícilmente esté dirigido exclusivamente por los intereses de un solo sector, aunque, en varios momentos, parezca estarlo o haya sido propuesto por uno específico (Ferguson 1994, Li 2007). Es decir que el gobierno no implica la búsqueda de objetivos dogmáticos sino diversas finalidades específicas (Foucault 2001). De manera que no puede esperarse que las finalidades y los objetivos de la gestión de un territorio sean del todo coherentes y compatibles entre sí. Pueden ser incompatibles, permitiendo intervenciones que entran en tensión unas con otras, o que son completamente contradictorias: “La multiplicidad de poder, las diversas formas en que se enfrentan las posiciones prácticas de las personas, las diversas formas en que los actores juegan unos con otros, produce brechas, grietas y contradicciones” (Li 2007:25-26). Es en estas grietas donde Scott (1985) encuentra que “los débiles” desarrollan formas para oponerse al poder, disputarlo, o soportarlo, al menos en el ámbito de las ideas y las creencias. Los sujetos encuentran estas inconsistencias que proveen fuentes para perspectivas críticas. Desde esta mirada, la acción del Estado lleva a crear grupos en lugar de individuos aislados y, dentro de estos grupos, las perspectivas críticas son potencialmente compartidas. Así

(...) uno de los efectos inadvertidos de los programas de desarrollo es la producción de grupos sociales capaces de identificar intereses comunes y movilizarse para transformar su situación. Estos colectivos tienen sus propias diferencias internas de clase, étnicas, fracturas de género, pero su encuentro con intentos para desarrollarlos crea las bases por sus idas y acciones políticas (26).

En la provincia de Misiones, las políticas de conservación de la naturaleza han posibilitado nuevas formas de inclusión social, acompañadas de transformaciones en la subjetividad. El discurso de la conservación se torna un medio para encauzar reclamos sociales, tanto debido a la legitimidad que adquirió dentro del ámbito político como por reproducirse en una arena donde los pobladores sienten que pueden incluirse.

UN ESPACIO MARGINAL SE CONVIERTE EN TERRITORIO DE CONSERVACIÓN

La provincia de Misiones tuvo un lugar marginal en el proyecto productivo agro-ganadero argentino. En el siglo XIX formó parte de un territorio mayor disputado por Argentina, Brasil y Paraguay, cuando se estaban definiendo sus fronteras nacionales. Durante el siglo XX, el territorio misionero cumplió el rol de frontera agraria, esto es, un espacio abierto apto para atraer población en busca de oportunidades de ascenso social. En el modelo productivo dominante, la selva paranaense constituyó un freno al progreso y, por lo tanto, un espacio sobre el cual se debió avanzar transformándolo en productivo. Esto se tradujo en la promoción de la actividad forestal y en políticas de colonización dirigidas a pequeños y medianos productores rurales. El actor que movilizó la expansión de la frontera agraria fue “el colono”, con un tipo de producción organizada en torno al trabajo familiar y al cultivo de perennes (sobre todo, yerba mate y té) y anuales (tabaco). Las poblaciones indígenas, progresivamente, fueron viendo limitados sus territorios y se fueron incorporando a la producción rural en el estrato más bajo, como peones temporarios, desplazándose monte adentro (Gorosito 1982). Tal es el caso de las comunidades de la Reserva de Biosfera Yabotí.

La expansión de la frontera agraria sobre tierras fiscales finalizó en la década de 1990, cuando, a su vez, se intensificaron las políticas neoliberales que llevaron a eliminar barreras al comercio exterior y a la retracción del Estado en la regulación de los mercados y en la oferta crediticia. Así se vigorizó un proceso de concentración capitalista en las etapas de acopio y de manufactura de la producción agrícola, que tuvo como consecuencias la marginalización y el empobrecimiento de las familias de pequeños y medianos productores rurales. Frente a tal situación, se implementaron diversos programas de desarrollo rural, tanto a través de organismos oficiales como de ONGs, con el objetivo de permitir la subsistencia de los agricultores familiares en el campo (Baranger *et.al.* 2005).

En principio, la estrategia de estas agencias de desarrollo consistió en promover una producción que satisficiera las necesidades alimentarias familiares y alcanzase cierto grado de comercialización en los mercados locales. A medida que agencias conservacionistas comenzaron a articularse con las de desarrollo, adquirieron un mayor peso los componentes de desarrollo sustentable y de agroecología, impulsando acciones de concientización sobre la conservación de los recursos naturales. Para los productores más empobrecidos, estos programas se constituyen en una de las principales fuente de recursos económicos dirigidos a emprendimientos productivos y a la subsistencia familiar, o para producciones destinadas al mercado: por ejemplo, creando cooperativas de producción y de comercialización de palmitos, fábricas de dulces a cargo de los pobladores, instalando ferias francas donde los pobladores, eximidos de impuestos, comercializan su producción, entre otros. Estos programas no se generan en el marco de políticas articuladas, sino como recursos aislados que llegan a grupos parciales de la población.

En este proceso, durante la última década del siglo XX en Misiones, se inició una significativa expansión del sector foresto industrial. Gracias a los

incentivos estatales, este sector se convirtió en el movilizador de la economía provincial.⁵ De las 27.995 explotaciones agropecuarias con límites definidos (Censo 2002, INTA 2009), el 92,8 % corresponde a unidades de hasta 100 ha. distribuidas sobre el 35,4 % de la superficie censada, mientras el 0,2% del total de explotaciones corresponden a empresas y corporaciones, ocupando el 37% de la superficie. Esta concentración llega al punto en que una sola empresa forestal posee el 8% de la superficie provincial (INTA 2003).

La relación entre el sector forestal y el de la producción rural está dominada por múltiples tensiones. El desarrollo de la foresto industria, frente a la caída de la producción agrícola, llevó a muchos pequeños productores a vender sus tierras a empresas forestales, mientras que otros comenzaron a forestar sus chacras para vender la madera a tales empresas, quedando supeditadas a las presiones de estas últimas. Por su parte, las tensiones entre empresas forestales y comunidades indígenas se potenciaron debido al avance de la explotación forestal sobre las áreas de caza y recolección. En varios casos de tierras asignadas a comunidades indígenas, los caciques permiten la explotación forestal del monte nativo con la anuencia de funcionarios provinciales, lo que, en general, resulta una fuente de conflictos internos a la comunidad.

LA ARENA CONSERVACIONISTA MISIONES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERRITORIO ECOLÓGICO

En las tres últimas décadas, Misiones adquiere la impronta de ser un territorio de selva que debe ser conservado, todo lo cual es central en la construcción de las responsabilidades de los pobladores hacia este espacio. Hacia la década de 1980, se presenta en la provincia un conjunto de actores preocupados por el avance de la frontera agraria sobre la selva nativa que comenzaron a proponer la creación de reservas naturales. Los actores más activos estaban vinculados a la ONG Vida Silvestre Argentina (representante local de WWF), al Ministerio de Ecología y a la RNR provincial, estrechamente vinculado a esa ONG. Por entonces, a nivel nacional y regional, se evaluó que Misiones contenía el último remanente continuo de selva paranaense, propicia a ser conservada. Hasta inicios del siglo XX, esta selva ocupó toda la mitad este del Paraguay y los estados del sur de Brasil, contando con una superficie de casi medio millón de km². A principios del siglo XXI, aún existe el 7,8% (Di Bitetti *et. al.* 2003), donde la única porción con posibilidades de reproducción de especies de flora y fauna en estado salvaje se presenta en Misiones. Esta provincia cuenta con 1.123.000 ha. de selva, lo que representa el 20% de la selva paranaense existente (Di Bitetti *et. al.* 2003).⁶ Tal situación se debe a que las áreas de selva paranaense de Brasil

⁵ La expansión de la foresto industria contribuyó al proceso de concentración de tierras. Actualmente, el 12,5% de la superficie provincial se destina a la actividad forestal realizada por grandes propietarios. Datos obtenidos en base al sitio: <http://extension.facfor.unam.edu.ar/sifip/inventario.htm> (consultado el 7 de enero de 2014).

⁶ Según el Coordinador del Programa Selva Paranaense de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), las imágenes satelitales del año 2010 indican que la superficie remanente es de, aproximadamente, 1,49 millones de hectáreas,

(...) lo que implica un 58% de la superficie original (...) Esta situación hace a la provincia de Misiones la responsable de la conservación de más del 50% de la superficie reman-

y Paraguay fueron velozmente transformadas en campos de cultivo, ocupando allí función similar a la que tiene la región pampeana en Argentina.

Con el uso de imágenes satelitales se evaluó que el principal responsable por la degradación de la selva era la expansión de la frontera agraria, de manera que el conservacionismo se constituyó en un frente que le disputaba al agrario las últimas porciones de tierras fiscales desocupadas para conservarlas. La consigna del frente conservacionista fue salvar la selva de forma inminente. Para ello se puso en marcha un mecanismo, no del todo articulado, por el cual la selva pasó a ser uno de los elementos constitutivos de la identidad misionera. En los *slogans* oficiales, Misiones comenzó a ser “salvajemente verde”, mientras, a nivel global, se la postulaba como “un bastión verde del planeta”. De esta forma, la provincia dejó de ser un territorio donde predominaban las ideas desarrollistas que promovían la producción agroindustrial para pasar a ser un espacio donde debía combinarse la foresto industria y la conservación.

La política conservacionista que se gestó a partir del año 1988 resultó ser particularmente eficaz, en tanto cumplió con el objetivo de expansión de las reservas naturales provinciales. Entre los años 1988 y 2013 se pasó de 6 a 67 Áreas Naturales Protegidas, mientras que la superficie bajo conservación pasó del 2,9% al 15%.⁷ El modelo de ANP predominante fue el de Áreas estrictas sin población humana e, incluso, se llegó a expulsar a pobladores para crear Reservas. En relación con las comunidades indígenas, históricamente predominó la postura de invisibilizarlas, considerando que en esas Áreas no había pobladores, mientras que eran habitadas por comunidades; en algunos casos, se trató de expulsarlas de las tierras por preservar. En general, los colonos han considerado a las autoridades de los ANP como agentes represivos, lo que llevó al despliegue de estrategias para evitarlos, ocultando prácticas productivas prohibidas. Por otro lado, no han sido pocas las situaciones de violencia directa, iniciando fuego contra estas. El hecho extremo fue el ataque con armas de fuego a un guardaparques. Por el lado de las poblaciones mbya-guaraní, no se llegó a este grado de enfrentamiento, probablemente porque la creación de ANP constituyó uno más de los tantos hechos de sometimiento violento que pueblan su historia reciente.

Durante la década del 90 e inicios del siglo XXI, comenzó una nueva etapa de expansión del conservacionismo en la provincia, dominada por la pretensión de que de las poblaciones locales participaran en la conservación. Por un lado, ONGs conservacionistas que ya trabajaban en la región, como Fundación Vida Silvestre Argentina y otras que, por entonces, comenzaban a hacerlo, como Conservación Argentina⁸ y Selvas para Siempre, impulsaron proyectos de de-

ente de estos bosques globalmente amenazados (...) Afortunadamente, la superficie deforestada, anualmente, logró disminuirse desde 18.800 ha/año en el período 1989-2004 a 6.700 ha/año para el período 2004-2010. (En http://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/noticias/vsol.cfm?7902, consultado el 10 de octubre de 2013).

⁷ Esto incluye distintas categorías de ANP: provinciales (35), privadas (22), municipales (5) y nacionales (5). La superficie total bajo conservación en estas categorías es de 446.304 has. (la superficie provincial es de 2.980.100 has.). Aquí no se incluyen el Corredor Verde Misionero ni el Parkway Ruta Costera del Río Uruguay. (Cálculos hechos en base a datos del Ministerio Provincial de Ecología, en <http://www.ecologia.misiones.gov.ar/>, consultado el 10 de diciembre de 2013).

⁸ Por ejemplo, Conservación Argentina organizó una cooperativa para elaborar dulces a partir de frutos del monte nativo, mientras FVSA creó una cooperativa de productores de palmitos y también generó

sarrollo rural cuyo primer objetivo era promover actividades productivas entre los pobladores rurales, que contribuyeran a la conservación de la selva. También, en el trabajo con propietarios de tierras, estas agencias dieron un fuerte incentivo a la creación de Reservas Naturales Privadas. Por otro lado, ONGs de desarrollo comenzaron integrar la idea sustentabilidad en sus proyectos. Por ejemplo, INDES⁹ y APHyDAL¹⁰, en las colonias vecinas a la RBY, impulsaron proyectos agro-forestales, restauración de tierras deforestadas, aplicación de técnicas selectivas de forestación, prospecciones de biodiversidad y ecoturismo. Una institución central fue el Área de Manejo Integral de la Reserva de Biosfera Yabotí (AMIRBY),¹¹ que tuvo un rol central en los conflictos socioambientales en torno a esta Reserva, en particular en la resolución del conflicto con colonos que introdujeron tierras y en la demarcación de tierras indígenas (en esta última tarea trabajaron junto a EMIPA). Y, finalmente, otra institución que participó en esta tendencia fue el Proyecto Araucaria XXI, integrado por el Parque Nacional Iguazú, el Ministerio provincial de Ecológica y la RNR, y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Este proyecto impulsó, a su vez, proyectos de bioprospección, de desarrollo rural sustentable y de eco-turismo (si bien su trabajo se concentró en el norte provincial), actuó en el área de la RBY, participando en discusiones para la resolución de conflictos, y en la creación de la cooperativa agrícola Esperanza. Los participantes de esta arena crearon un espacio político de nuevas alianzas formadas alrededor del objetivo general de detener la deforestación y lograr la colaboración de los pobladores, generándose así nuevas contradicciones. De manera que las estrategias de conservación dejaron de tener por objetivo principal incrementar la cantidad de ANP y apuntaron a establecer lazos entre conservación y producción agrícola. Como consecuencia de este proceso, se observa una expansión del conservacionismo, a nivel de las colonias e indígenas, así como el crecimiento de su legitimidad entre los pobladores. En este contexto, tomaron renovado ímpetu los conflictos llevados adelante por colonos, en torno a tierras, acceso a servicios y derechos, y por comunidades guaraníes en torno al uso de la tierra.

DOS CONFLICTOS EN LA RESERVA DE BIOSFERA YABOTÍ

La Reserva de Biosfera Yabotí (RBY) es un área natural protegida que se encuentra en el noreste de Misiones, establecida en 1992. La categoría de Reserva de Biosfera fue creada por la UNESCO en la década de 1970, formando parte de la tendencia que busca integrar conservación con poblaciones locales y explotación de los recursos naturales. En el caso de la RBY (250.000 ha.), el 80% de su superficie es de propiedad privada, en manos de 31 propietarios, y se destina

proyectos de educación ambiental implementados en escuelas rurales.

⁹ La ONG INDES (Instituto de Desarrollo Social) trabaja en la región desde principios de la década de 1980 en temas productivos y de organización de las poblaciones rurales. Durante la década 1990, esta ONG incorporó perspectivas de desarrollo sustentable y de género a sus proyectos productivos.

¹⁰ La Asociación de Promoción Humana y Desarrollo Local (APHyDAL) trabajaba en proyectos de desarrollo rural con perspectiva sustentable y, sobre todo, en la organización de los pobladores rurales que participaron en tomas de tierras.

¹¹ La AMIRBY depende del Ministerio de Ecología y de la RNR provincial, pero no sigue la línea conservacionista marcada por esta repartición sino que, en oposición, desde su creación ha estado más vinculado a las líneas de trabajo del Comité MAB Argentina.

a la explotación forestal del monte nativo que, por ley, debe realizarse siguiendo determinados parámetros de sustentabilidad. El 20% restante de la superficie es propiedad del Estado provincial y está destinado a Parques Provinciales y a Reservas Estrictas, encontrándose prohibida toda actividad productiva. Aunque la categoría de Reserva de Biosfera implica la coexistencia de actividades productivas con conservación, en la creación de la RBY tan sólo se contempló la producción forestal latifundista, dado que, al principio, esta Reserva respondió a intereses de los empresarios forestales y de agentes que consideraban que la conservación debía evitar trabajar con comunidades locales. Pero, cuando esta Reserva se creó, sus límites externos ya estaban habitados por familias de productores rurales que usaban estas tierras para cazar, pescar, extraer madera. Y las tierras del interior de la RBY, si bien de propiedad privada, ya eran habitadas por unas quince comunidades mbya-guaraní¹². Ni las poblaciones rurales ni las mbya-guaraní fueron consideradas en la creación de la Reserva de Biosfera, pues tal como mencionó en una entrevista uno de sus mentores: “hicimos la Reserva en ese lugar porque estaba deshabitado.” Cuando pregunté si había comunidades guaraníes, la respuesta fue: “su estilo de vida nómada no permite trabajar con ellas”. De manera que se las invisibilizó, considerando con la ley de creación (Ley provincial 3041/1992) que las tierras eran de propiedad privada en manos de empresarios forestales y que el único uso que se realizaba de los bosques era el forestal.

El principal conflicto que involucró a pobladores colonos vecinos a la RBY tuvo lugar a fines del año 2006, cuando 62 familias ocuparon tierras del norte de la Reserva. Dentro del bosque nativo delimitaron las chacras de cada familia y empezaron a construir viviendas precarias de madera y bolsas de plástico. Los ocupantes eran productores que desarrollan una economía basada en la explotación de pequeños lotes (promedio de 25 has.), donde combinan la producción de tabaco y yerba mate con productos destinados al consumo familiar (Baranger *et.al.* 2005). Las tierras ocupadas eran, y continúan siendo, de propiedad privada, dedicadas a la explotación forestal, cuyos bosques, según los colonos, pronto serían talados.

Tres días después de la ocupación, se presentaron en el lugar los guardaparques de la Reserva pidiendo el inmediato desalojo, a lo cual los ocupantes se negaron. Uno de ellos expresó los motivos de la ocupación: “vinimos con el objetivo de tener una chacra, ocupar un pedazo de tierra, para el sustento de nuestros hijos, para tener donde plantar, porque no tenemos tierras y queremos un pedazo para plantar, pensamos en el futuro de nuestros hijos ya que no podemos mandarlos a estudiar” (Palma 2008:12). Pero también manifestaron la necesidad de que se hiciesen presentes las autoridades del Ministerio de Ecología de la Provincia, con quienes discutirían desalojar la Reserva a cambio de acceso a planes de desarrollo y servicios, como energía eléctrica, caminos en buen estado y mejorar las condiciones edilicias y de personal de las escuelas del área. Uno de los líderes de la ocupación alegó que sólo ellos, los pequeños y medianos productores rurales, pueden “cuidar el monte, hacer cultivos sustentables y proteger la ecología. Esta selva es el pulmón del mundo y los colonos tenemos que ser los guardianes de la selva”, con lo cual marcaban una diferencia

¹²Las comunidades del área en 2003 son: Kapi'iYavate, TekoaYma, ArachaPoty, YakāPorā'i, Takuaruchu, Kuri, PindoPoty, Yryapy, Jejy, Paraje Mandarin, YabotiMirĩ, ItaChĩ, Caramelito, YvyRaity y Ka'aguayMirĩ.

con los propietarios de las tierras que serían dedicadas a la forestación.

El conflicto que involucra a las poblaciones mbya-guaraní que habitan dentro de la RBY ha tenido momentos más álgidos. Si bien estas poblaciones no fueron tenidas en cuenta por la legislación y fueron consideradas por los administradores de la Reserva como una población marginal, paradójicamente la creación de la Reserva de Biosfera ofreció a las comunidades un nuevo marco legal desde donde hacer frente a la explotación del monte en la región. Incluso el hecho de encontrarse dentro de la Reserva les ofreció un nuevo marco discursivo desde donde presentar sus luchas y abrió una nueva posibilidad de alianzas con agencias de conservación. Tal como señala LeiteLopes (2004), los conflictos socioambientales locales promueven una interiorización de los derechos y de los argumentos ambientales, presionando por leyes y controles estatales, y, al mismo tiempo, siendo fomentados por tales instrumentos estatales. La primera manifestación pública por la explotación del monte en la Reserva fue realizada en el año 1997 por la ONG ecologista local Cuña Pirú, que denunció apeo ilegal y falta de control de la madera que se extrae de la Reserva. En el año 2000, se sumaron el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y la Asociación de Comunidades Aborígenes, que agrupa a comunidades de la región. Entre estas instituciones organizaron una campaña, que alcanzó transcendencia a nivel provincial denunciando la excesiva tala de madera en la Reserva, sobre todo en el área de la comunidad TekoaKapiíYvaté. A partir de entonces, se fue incrementando la movilización contra la tala del bosque en las áreas en torno a las aldeas guaraníes de la RBY: en particular, se identificó que había dos lotes (7 y 8) que eran excesivamente explotados, y en los cuales se encuentran las comunidades TekoaYma y TekoaKapiíYvate, y que son zona de caza y de recolección de varias otras. La tensión fue creciendo, a medida que la movilización circulaba por redes de agrupaciones ecologistas, y alcanzó repercusión en la prensa local. El conflicto encontró su momento más álgido en el año 2004, cuando se suma a la movilización la ONG FUNAM y despliega un aparato de comunicación que le da trascendencia internacional. Ese año, la situación fue denunciada en la Cámara de Diputados de la Nación (16 de junio) y en Cámara de Diputados de la provincia (23 de junio) por los Caciques de TekoaYma y TekoaKapiíYvate, junto a miembros de ENDEPA y de FUNAM. También en 2004, el presidente de FUNAM expuso el tema en un panel de la UNESCO en París, todo lo cual sirvió para aumentar la tensión a nivel local y acelerar la búsqueda de una resolución al conflicto. En el Manifiesto que las comunidades presentaron en el año 2008, explican los orígenes de su lucha remarcando que “vemos a los camiones madereros, llevándose la selva, y con ésta el agua y nuestro futuro, es como si el bien (de las compañías) será nuestra muerte, de nuestra gente y de nuestra cultura”.¹³

Los casos de tomas de tierras por familias de colonos en la provincia de Misiones, en general, son resueltos por la justicia penal, actuando, como fuerzas de represión, el cuerpo de gendarmería nacional y la policía provincial. En este caso de la ocupación llevada a cabo por colonos en el norte de la RBY, el gobierno provincial aceptó que el Ministerio de Ecología entrase en negociaciones

¹³ Este manifiesto, el 3° *Manifiesto de PindóPoty*, presenta los resultados de la reunión, donde participaron Mburuvichakuery (caciques), Opyguas y miembros de las comunidades del área de la RBY, realizada en un Aty Guachu (Asamblea Grande) en Tekoa Pindo Poty, del 24 al 27 de marzo de 2008.

con los ocupantes, tratando de llegar a un desalojo pacífico. El acuerdo que se estableció fue que los ocupantes desalojarían las tierras a cambio de no recibir sanciones y que se les posibilitaría el acceso a crédito, programas de desarrollo, mejora en servicios (en los caminos locales, electricidad, etc.) y en construcción de aulas escolares nuevas. Pocos meses después, se instauró una “mesa de diálogo” encargada de llevar adelante esos reclamos, conformada por representantes de los colonos, el Ministerio de Ecología provincial, el Proyecto Araucaria XXI y la ONG Fundación Vida Silvestre Argentina. De manera similar, en la primera década del siglo XXI, las comunidades Mbya-gaurani de la Reserva han incrementado su participación política en el diálogo con el Estado y con organizaciones ambientalistas. En 2006, las negaciones llevaron a que el Estado delimitase diez mil has. de propiedad de empresas madereras, dentro de la RBY, donde se prohibía toda explotación forestal, respondiendo así a parte de las demandas indígenas.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO LUGAR E IDENTIDAD COLONA EN EL TERRITORIO DE CONSERVACIÓN

Si bien, fuera de casos puntuales, los programas de desarrollo sustentable no han mejorado la situación del conjunto de los productores, tuvieron resultados que exceden lo estrictamente productivo. Ante un escenario económico que ha llevado a marginalización y a exclusión, la difusión de perspectivas de desarrollo sustentable y la presencia de discursos y prácticas conservacionistas están aportando a los pobladores rurales elementos narrativos que se ponen en juego para construir una nueva identidad, un nuevo espacio de legitimidad, desde donde construir un espacio de acción y un sentido de derechos ciudadanos. Aquí tiene lugar una redefinición de la categoría de “colono”, la que, si previamente implicaba una modalidad de tenencia de la tierra, una situación legal y una actitud de poblar y convertir en productivos los espacios con selva (Abinzano 2004, Bartolomé 1991, Schiavoni 1998), con la nueva configuración del territorio, en las tierras vecinas a la RBY, *ser colono* implica una forma de vida vinculada a la naturaleza, a conocimientos sobre los recursos naturales y a la capacidad para lograr productos “sanos”, “orgánicos”, “artesanales”, todo lo cual se refuerza cuando las agencias de desarrollo y aquellas de conservación, que enfatizan el trabajo con los colonos, subrayan las cualidades productivas de la pequeña explotación rural que, por desarrollarse a pequeña escala, en torno al trabajo familiar y con uso de tecnología rudimentaria, sería más proclive a un tipo de desarrollo sustentable que las grandes explotaciones organizadas con una lógica empresarial. Desde este lugar se produce una “auto-naturalización” de los colonos, quienes crean una versión propia del territorio de conservación.

A su vez, las comunidades indígenas generan una “identidad conservacionista” al presentarse como poseedores de un estilo de vida que sólo puede desarrollarse en la selva, con lo cual la presencia de comunidades mbya-guaraní implicaría la presencia de selva.¹⁴ Esta construcción identitaria se enmarca en una lucha por regular el acceso a las áreas selváticas y detener el avance de las

¹⁴ El problema del esencialismo estratégico ha sido planteado en el texto ya clásico de Conklin y Graham (1995).

empresas forestales. En uno de los manifiestos¹⁵ que representantes de las aldeas dirigen a las autoridades blancas aquellos señalan que:

Somos parte de la selva no sus dueños como el Kochi, Pekari, Venado, Coatí, Paca, sin el monte no sólo se acaba nuestra vida sino también la de todos ellos. Son las distintas vidas las que hacen que la selva viva pero todos precisamos de los árboles; pedimos al gobierno que ordene la suspensión de toda tala en la Reserva de Biosfera de Yaboty y en toda la provincia.

Por otro lado el cacique de una aldea dentro de la Reserva, en un discurso político dirigido a representantes del Ministerio de Ecología provincial, dice que:

(...) hace 500 años que estamos sufriendo. No queremos perder nuestra cultura ni nuestra religión. Cada uno nació para que dios pueda darnos la tierra y compartir. El sufrimiento vino por culpa de la Empresas que destruyen el monte y por culpa del Estado... aunque somos nosotros, antes que ellos, los que estamos viviendo aquí. La comunidad de los pueblos originarios sabe usar el monte.

Tanto entre colonos como entre guaraníes, se presenta una nueva forma de posicionarse frente al Estado y las agencias no gubernamentales de conservación, donde se busca legitimar los derechos que tanto guaraníes como colonos tendrían como potenciales cuidadores de la selva. Aquí se presenta una notable diferencia entre la forma de organizar la acción de guaraníes y colonos. Para los colonos la legitimidad de la lucha está mucho más ligada a reclamar derechos ciudadanos que mejoren su "*calidad de vida*" (expresión usada por el presidente de la cooperativa agrícola Esperanza creada luego del conflicto por la toma de tierras), tales como contar con escuelas, caminos, acceso a mercados, programas de desarrollo rural. En tanto desde las comunidades mbya-guaraníes, los derechos que se reclaman frente al Estado tienen que ver con el cumplimiento de la legislación, o con transformar la legislación, en particular la relativa a derechos territoriales. Sin dudas, es central en esta diferencia cómo cada uno de estos grupos se posicionan frente a la sociedad nacional. Los colonos que habitan en torno a las ANP, no sólo tienen en general regularizada la tenencia de la tierra, sino también reclaman un lugar como actores productivos participando en una economía de mercado. Mientras que para los mbya-guaraní la búsqueda es por conservar un estilo de vida ligado al territorio y la selva; si bien participan en el sistema productivo dominante, trabajando como peones rurales o vendiendo artesanías. Es decir que entre colonos y entre guaraníes se presenta una búsqueda de construir ciudadanía en tanto posicionarse como agentes de derecho, pero mientras para los colonos esto implica alcanzar una igualdad en una forma de vida, para los guaraníes implica el cumplimiento de una legislación que les permita mantener sus diferencias.

¹⁵ En "3° Manifiesto de PindóPoty", marzo, 2008.

En la legitimación de sus luchas colonos y mbya-guaraníes, se pone en juego la definición que cada sector hace del territorio. Los colonos se apropian de la valoración de la región como un ambiente singular en tanto “un pulmón para el mundo”, ya que produce “aire puro para el planeta”, a partir de lo cual se justifica la necesidad de conservarla. A su vez, sí desde el inicio de la colonización la selva fue pensada como opuesta a la producción y como una fuente de tierras agrícolas, en la actual etapa de expansión del conservacionismo, los pobladores comenzaron a pensarse a sí mismos como parte de este ambiente y no como algo que les es ajeno y que deben transformar. Una de las consecuencias de esto es que se asumen como responsables por el estado de la selva. Según un pequeño productor que habita un área en conflicto con un productor forestal:

El colono cuida el monte, cuida la tierra, porque si erosionamos todo, después no tenemos más nada, ya no hay más tierras donde podamos ir si erosionamos ésta donde estamos ahora. Por eso tenemos que cuidar, estamos obligados a proteger el monte, el agua, todo lo que tenemos, lo que nos da de vivir... Si no estuviésemos nosotros, los dueños que reclaman estas propiedades ya tumbaron todo y plantaron el pino. Porque para eso quieren ser los propietarios, para plantar el pino, o para venderle todo a Alto Paraná.

La identidad se construye en oposiciones y autoadscripciones (Barth 1976). La imagen de los pobladores locales como poseedores de capacidades ambientalistas se elabora en momentos de conflictos, donde es necesario establecer distinciones frente a otros. Tanto para mbya-guaraníes como para los colonos, la industria forestal constituye el principal actor social por oposición al cual se construyen sus identidades. Ambos ven cómo la foresta industria avanza sobre los montes nativos. Por un lado, los colonos viven la presión por las dificultades de accesos a mercados, que lleva a muchos a vender los árboles que se encuentran en sus lotes a bajo precios y, a largo plazo, a vender sus tierras a empresas forestales. Mientras que, por otro lado, las comunidades mbya-guaraní viven la presión de ver cómo disminuyen los montes donde cazan y recolectan.

En la identidad conservacionista que construyen los colonos también se presentan elementos en oposición al manejo de la selva que se realiza en países vecinos, que, según un colono: “han desmontado sus montes y ahora mandan científicos para que estudien nuestra selva”. Se presenta a la provincia de Misiones como territorio que cuenta con el último remanente de selva paranaense en oposición a la situación de alta fragmentación que tiene este ecosistema en Brasil y Paraguay, situación que se remarca en las imágenes satelitales presentes en la folletería y el material didáctico que ONGs conservacionistas ponen en circulación en las escuelas del área. Frente a la visión, en particular de los campos brasileños como infinitas extensiones de monocultivos, la impresión de los colonos es contradictoria: por un lado, de admiración por el desarrollo industrial agrícola; por otro, de reprobación, al reconocer la degradación de suelos, aguas y bosques, y la expulsión de los pequeños productores que implicó ese desarrollo. Frente a brasileños y paraguayos, los colonos construyen una imagen de sí como misioneros conservacionistas, defendiendo un patrimonio de

la Nación y la Provincia. A la vez, posicionan a la selva misionera a nivel global tal como remite la idea de que este es un “pulmón del planeta”, con lo cual los colonos adquieren responsabilidades globales en tanto de sus prácticas pueden depender del “cambio climático” o “el oxígeno del mundo”.

En esta mirada de sí como conservacionistas, los colonos ponen en juego los sentidos que dan a su propia trayectoria personal y grupal; tal como propone Candau (2001), memoria e identidad se construyen mutuamente. En los relatos de vida de pobladores del norte de la RBY, aparecen elementos recurrentes. Por ejemplo, al referir al momento en que arribaron al terreno donde cada uno creó su chacra, el área se describe en términos paradisíacos, con abundancia de selva, animales salvajes, plantas, tierras rojas ricas, etc. En tanto las trayectorias productivas personales se narran como un trabajo duro, cierta capitalización, bienestar y desarrollo, también se señala que la explotación de los recursos naturales se hizo con desconocimiento y cierta inocencia, tal como lo expresó un poblador del área: “pasa que nosotros nacimos para tumbar, vemos un palo en pie y lo tumbamos, hasta que nos dimos cuenta que no funciona así, que la tierra no aguanta así.” Este período de intensa explotación de la naturaleza, en general, se cierra con relatos de tiempos más recientes de empobrecimiento de las colonias, donde las tierras quedaron sin su cubierta verde, yermas, agrietadas, donde sólo aumenta la capuera, las aguas contaminadas y las familias que sufren la baja producción y las condiciones desiguales de comercialización. Aquí no faltan referencias a familias que tuvieron que migrar a las ciudades a engrosar villas miserias.

En estos relatos sobre el poblamiento del territorio, los colonos se naturalizan, si bien no rompen con la lógica dualista moderna (Descolá *et. al.* 1996, Milton 1996, Ingold 2000); establecen vínculos fuertes con el medioambiente, y las trayectorias personales se vinculan a la historia de la selva. Los árboles y el monte están siempre presentes y son marcadores en las historias personales, familiares y grupales. La disminución de la masa boscosa parece ser un indicador del paso del tiempo y de los distintos momentos del desarrollo de la familia. En este contexto, los pobladores se presentan con el rol de ser guardianes de la selva. Si para ellos el conservacionista es un discurso des-territorializado, en la apropiación que hacen del mismo y al crear una identidad conservacionista lo re-territorializan.

NUEVA INSTITUCIONALIDAD

El ingreso de los pobladores locales en la arena conservacionista derivó en negociaciones con las agencias que llevó a institucionalizar la acción colectiva. Dos tipos de instituciones se generaron en este proceso: entre los mbya-guaraní, los “aty guazú” (reunión grande) y, entre los colonos, se crearon “mesas de diálogo”. El “aty guazú” es un espacio formal donde los líderes de las comunidades que viven en la RBY se reúnen para unificar posiciones respecto a temas territoriales y de explotación de recursos naturales. Si bien los “aty guazú” son una institución tradicional guaraní, en la RBY es el Estado provincial quien los promueve y financia, y los rescató después de tres décadas. Desde la AMIRBY se consideró que recuperando un elemento tradicional se le daba mayor vigor a la

cultura guaraní y, a su vez, que el choque con la lógica estatal se aminoraba. En estos “aty guazú”, primero se reúnen sólo los líderes guaraníes y, cuando llegan a acuerdos y unifican una posición, se reúnen con aquellos blancos con quienes se ha decidido discutir.¹⁶ Puesto que no está estipulado cuánto tiempo puede durar cada “aty guazú”, los blancos en general deben esperar varios días hasta ser convocados para reunirse con los mbya. La institucionalización de la relación con las comunidades mbya-guaraní de la Reserva quedó formalizada en una periódica consulta a los líderes por parte de los funcionarios del Ministerio de Ecología y la Iglesia Católica. Hasta el año 2012, las comunidades tuvieron un lugar permanente en el Comité de Gestión de la Reserva, donde se sientan a discutir sobre el manejo de la Reserva junto a funcionarios estatales, propietarios de tierras y ONGs.

En las negociaciones con los colonos, el diálogo con el Estado se dio en el marco de una “Mesa de Diálogo”¹⁷ y esta pasó a ser la instancia de toma de decisiones sobre los problemas de tierras, servicios, educación, y producción y comercialización rural. Aquí se impulsó la creación de una cooperativa, llamada “Esperanza”, que gestionaría fondos para desarrollo rural y su comercialización. Esta cooperativa se desarticuló en el año 2008, sin recibir financiamiento, y su función fue tan sólo ser la instancia articuladora de la relación entre colonos y los demás agentes participantes de la “Mesa de Dialogo”.

La construcción de la nueva institucionalidad generó **una especie de pacto** que permite el gobierno del territorio, disminuyendo los conflictos. Una serie de reglas y normas se establecieron regulando la acción colectiva, definiendo espacios de acción posibles, privilegiando ciertas prácticas y limitando otras. Por ejemplo, se definió como aceptable y sujeto a negociación a determinados reclamos de los colonos, como la creación de escuelas rurales, la instalación de bombas para extracción de agua, la implementación de programas de desarrollo sustentable o de proyectos para producción hortícola de consumo familiar. Mientras que reclamos por la adjudicación de tierras, la titularización de lotes que son ocupados de hecho o el acceso a créditos para la compra de maquinaria fueron quedando relegados. A su vez, muchos de los colonos que lideraron los primeros momentos de las protestas, cuando se comenzó a negociar con el Estado y con ONGs, fueron excluidos tanto por los representantes de las agencias como por aquellos vecinos más negociadores. Entre quienes participan de las nuevas instituciones se considera que, si bien los reclamos más pretenciosos son justos, dificultan las negociaciones y la participación. En cierta medida, se homogeneizó la forma de reclamo. Y, finalmente, en la institucionalización de la acción colectiva, se crean privilegios y exclusiones. Las instituciones definen espacios de discurso y de prácticas, y privilegian ciertas formas de acción y limitan otras. De manera que las instituciones ambientalistas, lejos de ser liberadoras, son, sobre todo, formas de intervención (Brosius 1999).

¹⁶ En los “aty guazú” que se hicieron hasta el año 2008 hubo representantes del Ministerio de Ecología, de la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones, del Proyecto Araucaria XXI y de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones y del Equipo Misionero de la Pastoral Aborigen.

¹⁷ De esta “mesa de diálogo” participaron el Ministerio provincial de Ecología, el Ministerio de Asuntos Agrarios, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las ONG española Petjades y Fundación Vida Silvestre Argentina, y los colonos ocupantes de tierras.

CONSIDERACIONES FINALES

La referencia a ideas y discursos conservacionistas, en la lucha de las poblaciones colonas e indígenas de la provincia de Misiones, excede la búsqueda de legitimidad. Entre estos pobladores, la movilización tras consignas conservacionistas no representa una nueva forma de legitimar viejos reclamos, tal como propone LeiteLopes (2004). Los casos de acción colectiva aquí presentados muestran que las referencias ambientales trascienden una práctica meramente instrumental. En lugar de eso, nos encontramos frente a la construcción de nuevas subjetividades, identidades y ciudadanía. Este proceso viene acompañado por nuevos sentidos que adquiere el territorio, al que los pobladores comienzan a describirlo como un territorio “verde” y “ecológico”. Los pobladores empiezan a evaluar de manera crítica cómo sus prácticas productivas y sus formas de ocupación del espacio han ido construyendo el ambiente de las colonias, dándole la forma que hoy tiene, con áreas que presentan más o menos selvas, con especies que ya no se presentan. Hay una creciente reflexividad sobre la posición y las prácticas que ellos mismos tienen en el territorio y la que tienen los otros (empresas forestales, habitantes de países vecinos, entre otros). El verse como constructores del ambiente genera responsabilidades frente a este, por lo cual consideramos que un elemento central para comprender la acción colectiva de los pobladores locales radica en la posición activa que asumen, que les permite participar de la arena conservacionista y que les lleva a plantear sus problemas en términos ambientales. Las transformaciones en las subjetividades no se generan por procesos simbólicos que se imponen sobre los grupos sociales sino que se producen en la interacción social. Las nuevas subjetividades se comprenden en las relaciones dentro de esta arena y dentro de los cambios en las políticas de conservación y en los arreglos institucionales que aquellas suponen (Agrawal 2005).

En la interacción con ONGs e instituciones estatales, las comunidades pueden ser simultáneamente formadas, transformadas, co-optadas y constituidas como agrupaciones que realizan demandas al Estado o que le se oponen (Li 2005, Agrawal *et.al.* 1999). Las comunidades no son unidades naturales, sino que se forman, o se reformulan, en la interacción con programas de desarrollo (Li 2005). Es en este sentido que Agrawal (2005) señala que, entre los resultados de la creación de instituciones conservacionistas a nivel local, aparece la generación de nuevas formas de identidad y subjetividad.

¿Qué rumbos tomará esta incipiente acción colectiva y el nuevo rol de las poblaciones locales? ¿Derivarán en mayor democratización y profundización de la ciudadanía en estas áreas marginales? La respuesta es incierta, pero considero que no deja de estar presente la posibilidad de que los discursos e instituciones locales se solidifiquen y deriven en participaciones formales y burocráticas, que a la larga se conviertan en nuevas formas de sometimiento, ahora revestidas de verde. Entre las agencias conservacionistas que trabajan en el área, la participación de las poblaciones locales es considerada como la solución para los problemas de conservación, pero la participación por sí sola muestra no ser suficiente para el manejo de una región. La participación también puede constituirse en una forma de controlar la acción colectiva, determinando qué tipos de reclamos son legítimos y cuáles no, y de qué manera es legítimo movilizarse.

BIBLIOGRAFÍA

Abinzano, R. (2004). El frente extractivista: una formación socio-económica y espacial transfronteriza. (Argentina, Brasil y Paraguay 1865-1930). *Cuadernos de la Frontera*. Universidad Nacional de Misiones.

Adams, W. (2004). *Against Extinction: The Story of Conservation*. London. Earthscan Publications.

Agrawal, A. (2005). Environmentality: Community, intimate government, and the making of environmental subjects in Kumaon, India. *Current Anthropology*, 46, pp. 161-351.

Agrawal, A., & C.C. Gibson (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource management. *World Development*, 27(4), pp. 629-649.

Baranger, D. y D. Schiavoni (2005). Censo de Ocupantes de Tierras. *Estudios Regionales*, Vol. 28, No. 13., pp. 7-21.

Barth, F. (Comp.) (1976). *Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales*. México D.F. Fondo de Cultura Económica.

Bartolome, L. (1991). *The colonos of Apostoles: Adaptive Strategy and ethnicity in a Polish-ukranian settlement in Northeast Argentina*. New York. AMS Press, Inc.

Brockington, D. (2004). Community conservation, inequality, and injustice: Myths of power in protected area management. *Conservation and Society*, 2(2), pp. 411-432.

Brockington, D. y J. Igoe (2007). Neoliberal conservation: A brief introduction. *Conservation and Society*, 5(4), pp. 432-449.

Brosius, P. (1999). Analyses and Interventions: Anthropological Engagements with Environmentalism. *Current Anthropology*, Vol. 40, No. 3, pp. 277-310.

Brosius, P. (2006). Seeing Communities: Technologies of Visualization in Conservation. En Gerald Creed (Edit.), *The Seductions of Community: Emancipations, Oppressions, Quandries* (pp. 227-253). Santa Fe -NM-. School of American Research Press.

Brosius, P. y D. Russell (2003). Conservation from above: An anthropological perspective on transboundary protected areas and ecoregional planning. *Journal of Sustainable Forestry*, 17(1/2), pp- 39-65.

Brosius, P. y S. Hitchner (2010). Cultural diversity and conservation. *International Sciences Journal*, 61(199), pp. 141-168.

Candau, J. (2001). *Memoria e Identidad*. Buenos Aires. Ediciones del Sol.

Chapin, M (2004). A Challenge to Conservationists. *Worldwatch Magazine*, Nov./Dec, pp. 17-31.

Colchester M. (2003). *Salvaging Nature: Indigenous Peoples, Protected Areas and Biodiversity Conservation*. Moreton-in-Marsh, UK. World Rainforest Movement, Forest Peoples Programme.

Comunidades Mbya-Guaraní de la Reserva de Biosfera Yabotí. *3º Manifiesto de PINDO POTY*. Disponible en <http://argentina.indymedia.org/news/2008/04/591892.php> (Consultado el 22 de junio de 2011).

Concklin, B. y L. Graham (1995). The shifting middle ground: Amazonian indians and eco-politics. *American Anthropologist*, Vol. 97, N°4, pp. 695-710.

Descola, Philippe y Pálsson, Gísli (Eds.) (1996). *Nature and Society. Anthropological perspectives*. London. Routledge.

Di Bitetti, M.; G. Placci y L. Dietz (2003). *Una Visión de Biodiversidad para la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná: Diseño de un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad y Prioridades para las Acciones de Conservación*. Washington D.C. World Wild life Fund.

Escobar, A. (1999). *El Final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea*. Santafé de Bogotá. CEREC.IFAN.

Ferguson, James (1994). *The Anti-Politics Machine: "Development", Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Minneapolis. University of Minnesota Press.

Ferguson, J. (2006). *Global Shadows: Africa in the neoliberal world order*. Durham. Duke University Press.

Ferrero, B. (2012a). Environmentalism as an Arena for Political Participation in Northern Argentina. En Latta A. y H. Wittman (Ed.), *Environment and Citizenship in Latin America: natures, subjects and Struggle* (pp. 209-226). New York: Berghahn.

Ferrero, B. y C. De Micco (2012). Nuevas conformaciones de territorialidad en Misiones: Problemas sociales y ambientalismo. En Mastrangelo, A. (Ed.), *Condiciones de trabajo y ambiente en la Argentina del siglo XXI* (pp. 175-200). Buenos Aires: Editorial Biblos.

Fletcher, R. (2010). Neoliberal environmentality: Towards a post-structuralist political ecology of the conservation debate. *Conservation and Society*, 8(3), pp.171-181.

Foucault, M. (2001). *Defender la sociedad*. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

Galvin M, y T. Haller (Ed.) (2008). *People, Protected Areas and Global Change: Participatory Conservation in Latin America, Africa, Asia and Perspectives of the Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South*, University of Bern. Vol. 3. Bern. Geogra- Bernensia.

Gorosito, A. M. (1982). *Encuentros y desencuentros. Relaciones interétnicas y representaciones en Misiones, Argentina*. Tesis de Maestría, Universidad de Brasilia. (Inédita).

Ingold, T. (2000). *The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill*. London. Routledge

INDEC (2002). *Censo Nacional Agropecuario, Buenos Aires*. Disponible en <http://www.indec.gov.ar> (Consultado el 13 de junio de 2011).

INTA Centro Regional Misiones (2003). *Plan de tecnología regional (2001—2004)*. Buenos Aires. Ediciones INTA.

INTA Centro Regional Misiones (2009). *Plan de tecnología regional (2009—2012)*. Buenos Aires. Ediciones INTA.

Latta, A. (2009). The Ecological Citizen. En E.F. Isin (Ed.), *Recasting the Social in Citizenship* (pp. 239-260). Toronto: Toronto University Press.

LeiteLopes, Sergio (Coord.) (2004). *A ambientalização dos conflitos sociais*. Rio de Janeiro. Relume Dumará.

Li, T. M. (1996). Images of Community: Discourse and Strategy in Property Relations. *Development and Change*, 27(3), pp. 501-527.

Li, T. M. (2005). Engaging simplifications: Community-based natural resource management, local processes and state agendas in upland Southeast Asia. En J.P. Brosius, A. Tsing, y C. Zerner (Eds.), *Communities and Conservation: Histories and Politics of Community-Based Natural Resource Management* (pp. 135-159). Lanham, MD: Altamira Press.

Li, T. M. (2007). *The will to improve. Governmentality, development, and the practice of politics*. Durham. Duke University Press.

MacDonald, K.I. (2003). *Community-based conservation: A reflection on history*. Unpublished MS

MacDonald, K.I. (2010). The devil is in the biodiversity: Neoliberalism and the restructuring of biodiversity conservation. *Antipode*, 42(3), pp. 513-550.

Manzanal M. y Arzeno, M. (2011). Territorio y poder en la globalización. Disputas por la tierra en el nordeste de Misiones, Argentina. En Arroyo, M. y P. Zusman (Org.). *Argentina e Brasil: Possibilidades e Obstáculos no Processo de Integração* (pp. 83-116). Sao Paulo: Editorial Humanitas.

Milton, K. (ed.) (1996). *Environmentalism: the view from anthropology*. London. Routledge.

Nardi, M. A. (2011)- Dinámicas territoriales en torno al desarrollo rural en Misiones. En Manzanal, M. y Villarreal, F. (Comp.), *El desarrollo y sus lógicas en disputa en el norte argentino* (pp. 91-111). Buenos Aires: Ediciones CICCUS.

Palma, M. (2008). *Importancia de la gestión en el rol del guardaparque para la resolución de conflictos en áreas naturales protegidas*. Trabajo Final Técnico Universitario Guardaparque. Universidad Nacional de Misiones. (Inédito).

Redford, K. (2003). Mapping the conservation landscape. *Conservation Biology*, 17(1), pp. 116-131.

Redford, K., J.G. Robinson y W.M. Adams (2006). Parks as shibboleths. *Conservation Biology*, 20(1), pp. 1-2.

Schiavoni, G. (1998). *Colonos y ocupantes. Parentesco, reciprocidad y diferenciación social en la frontera agraria de Misiones*. Posadas, Misiones. Editorial Universitaria.

Scott, J. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. New Haven. Yale University Press.

Scott, J. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. New Haven. Yale University Press.

Turner, M. (2006). Shifting scales, lines, and lives: The politics of conservation science and development in the Sahel. En K. Zimmerer (Ed.), *Globalization and New Geographies of Conservation* (pp.). Chicago: University of Chicago Press.

West, P., J. Igoe, y D. Brockington (2006). Parks and peoples: The social impact of protected areas. *Annual Review of Anthropology*, 35, pp. 251-277.

Winer, N. (2003). Co-management of protected areas, the oil and gas industry and indigenous empowerment —the experience of Bolivia's Kaalya del Gran Chaco. *Policy Matters*, 12, pp.181-91.